

ARGENTINA: HACIA UNA REELECCIÓN COMPULSIVA



Cuarenta y ocho horas de estadía en Buenos Aires, para cumplir con una sencilla reunión académica, fueron suficientes para que retornásemos al Uruguay con la desagradable sensación de que Argentina ya comienza a inclinarse peligrosamente hacia una crisis institucional de proporciones.

Desde luego que, en un plazo tan breve, sería presuntuoso aspirar a ingresar en un análisis sistemático de qué es lo que se está deteriorando rápidamente en el vecino país. Sin embargo, el poco tiempo que le hubimos de dedicar a la prensa escrita, radial o televisiva, a hablar con colegas o simples ciudadanos, y a observar sencillamente la vida de la ciudad, fue suficiente como para que nos hiciésemos una idea sobre la paulatina consolidación de un clima de deterioro político y de profunda ruptura de las bases mismas de la concordia social en la sociedad.

La hipótesis central de todos los argentinos, con quienes hablamos, es que el proceso de crispación política y económica al que se encuentra sometida la República Argentina tiene como trasfondo la decisión de Cristina Kirchner de instrumentar un proceso de reforma de la Constitución que le permita reelegirse nuevamente como presidente o, si eso no es posible, quizás imponer a su hijo como “heredero” de la Casa de Kirchner.

Este disparatado y antidemocrático objetivo -(que, desde luego, no es novedoso en la Argentina ni en países como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba o Corea del Norte)- plantea, no obstante, algunos obstáculos.

Para que dicha reelección no sea un simple golpe de estado más en la historia argentina, es necesario que algo parecido a una instancia Constitucional “se pronuncie” sobre una eventual “Reforma” Constitucional que habilite dicha reelección. Ello sólo será factible siempre y cuando, en las elecciones legislativas del año que viene, el triunfo de los incondicionales de Cristina Kirchner permita una muy poderosa legión en el Congreso que esté dispuesta a votar cualquier cosa que ella le ordene. Sólo en esas condiciones es posible

pensar en una Reforma Constitucional y en una candidatura hegemónica del kirchnerismo para el año 2015.

En un régimen democrático razonablemente republicano y liberal, una versión decente de ese objetivo -(siempre que, en determinadas circunstancias muy excepcionales, alguien lo aceptase como tal)- se buscaría esforzándose en instrumentar una gestión gubernamental plural, sobria, cristalina y, sobretodo, apuntada a forjar amplias alianzas que permitiesen dar un sustento político amplio al proyecto.

Todo lo entrevistado en Buenos Aires indica que eso es totalmente imposible en la configuración mental del autoritarismo reinante. La idea presidencial es, evidentemente, reelegirse mediante el sometimiento, la derrota total o, eventualmente, la eliminación de todos aquellos que se opongan a la idea. El término medio, la conciliación, el acuerdo y el reconocimiento del otro, son terrenos desconocidos: se trata de conseguir TODO EL PODER. Este descomunal desaguisado requiere, por lo tanto, que se debilite al máximo, o que se haga desaparecer eventualmente, cualquier actor político que pueda siquiera esbozar un gesto con capacidad de entorpecer la operación reeleccionista.

Como la oposición en la Argentina hace tiempo que ha quedado totalmente desarbolada e inoperante por una triste confluencia entre los ataques sistemáticos del gobierno y su propia incapacidad política para reorganizarse, Cristina Kirchner tiene en la mira fundamentalmente a personajes que pertenecen al peronismo, a aliados del peronismo e, incluso, a integrantes del círculo más íntimo del propio kirchnerismo.

Así, por ejemplo, el Ejecutivo federal ha retenido 4.000 millones de dólares de fondos federales destinados a las provincias y se los ha quedado de manera de que múltiples provincias no puedan cumplir con los compromisos salariales de sus respectivas administraciones. El caso arquetípico es el retaceo de recursos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Scioli. Aunque kirchnerista de la primera hora, Scioli ya no goza de la confianza de la presidente por lo que, no solamente no le envía los recursos que le debe a la Provincia, le está "auditando" la gestión financiera al Gobernador. No nos preguntemos sobre la legalidad de la operación ni sobre las violaciones a las competencias provinciales. La Constitución de la República pasa siempre después de cualquier consideración de interés político en el mundo populista instalado en América Latina. Pero, como Scioli, hay otros gobernadores que están con la mano estirada esperando que su majestad la presidente se digne traspasar los recursos que debería transferir.

Y, correlativamente, esas transferencias se hacen esperar porque la esperanza final de la presidente es que las poblaciones provinciales culpen a los gobernadores y a sus gobiernos del no pago de sus haberes. Aunque es posible que así sea, también es posible que la población no sea totalmente estúpida y esté perfectamente informada que el que no paga las cuentas es el gobierno federal.

La operación reelección, al mismo tiempo, requiere no solamente arrasar con cualquier pretendiente a candidato. También tiene que desarticular centros de poder social como la CGT que, aunque no tengan posibilidades de generar candidatos presidenciables propios, poseen la capacidad de movilizar grandes grupos de gente cuya conducta política la presidente no puede "conducir". Es por ello que la presidente ha roto relaciones con la CGT de Moyano y, en términos generales, con grandes sectores del peronismo sindical.

En el mismo sentido, la operación reelección requiere de la toma de control de los medios. Y, en la medida en que no ha logrado derrotar, realmente, ni al grupo Clarín ni a La Nación, la presidente ha optado por seguir el camino ecuatoriano de Correa que consiste en generar prensa amarilla y oficialista al mando de testaferros y saturar hasta el hartazgo el espacio de los medios. De cadena presidencial en cadena presidencial (en 48 horas vimos, una en diferido, y otra en vivo), Cristina Kirchner se canta loas a sí misma en patéticos espectáculos poblados de acarreados, donde la presidente se regodea menospreciándolos

con agobiantes discursos egocéntricos.

Muchas más cosas podrían agregarse. Ante la evidente bancarrota financiera del país, la “caza” a los dólares adquiere perfiles caricaturales. No solamente el gobierno se apresta a perseguir a los argentinos que puedan tener dólares en Uruguay. Ahora los hogares que registren consumos de luz, agua o gas, por encima de una cifra arbitrariamente fijada por los esbirros kirchneristas, serán objeto de fiscalización especial. Su “consumo” resulta sospechoso.

Huelga decir que todo esto acontece en medio del más caótico escenario imaginable. Un vicepresidente envuelto en un notorio escándalo de presumible corrupción (Ciccione Calcográfica), la delincuencia desatada en particular contra los más humildes, la basura de 48 horas acumulada en todas las esquinas de la ciudad, los trenes de transporte de pasajeros circulando sin la menor garantía de que sean mínimamente operacionales, los precios al consumo desmintiendo cotidianamente las cifras oficiales de inflación, la instalación del narcotráfico a gran escala, etc. constituyen sólo algunos de los elementos que conforman el paisaje sobre el que se despliega la desmesurada operación de Cristina Kirchner

Como siempre sucede en la dinámica del desarrollo de los regímenes autoritarios y populistas, les resulta imposible distinguir donde es que están los límites que los separan de la más vulgar dictadura. En este caso, esos límites están desapareciendo rápidamente y de allí el intenso malestar social de una población que no deja de apreciar la frenética carrera por el poder absoluto en la que se ha enfrascado, cueste lo que cueste, la presidencia de la Nación.